

EL PERU FRENTE AL SIGLO XXI

Capítulo 21

Gonzalo Portocarrero - Marcel Valcárcel (Editores)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FONDO EDITORIAL 1995



El Perú frente al Siglo XXI

Primera edición, abril de 1995

Cubierta: Mochy Gonzales
Diagramación: Yoryina León M.

El Perú frente al Siglo XXI

Copyright © 1995 por Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria, cuadra 18.
San Miguel. Apartado 1761. Lima 100, Perú. Tlfs. 462-6390;
462-2540, Anexo 220.

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Derechos Reservados
ISBN 84-8390-990-1

Impreso en el Perú - Printed in Peru

Sinesio López Jiménez

ESTADO, REGIMEN POLITICO E INSTITUCIONALIDAD EN EL PERU (1950-1994)

INTRODUCCION

La hipótesis general de este ensayo sostiene que el complejo institucional del Perú en la segunda mitad de este siglo –su densidad, su grado de especialización funcional y su lógica de funcionamiento– es el resultado de la interacción de los procesos de modernización (Weber, 1964; Habermas, 1989) y de democratización (Tocqueville, 1957) así como de la forma de Estado (Hintze, 1968; Cardoso, 1985) y del tipo de régimen político.

De esta hipótesis general se pueden derivar otras hipótesis específicas como las que siguen:

1. La modernización de enclave, la débil emergencia del empresariado, de las clases medias y de la clase obrera (Cardoso, 1971a; Cardoso, 1971b), el escaso impulso de la modernización cultural –entendida como secularización (Weber, 1964, Germani, 1966)– y de la movilización social –definida por la urbanización, el alfabetismo, la educación, el consumo de medios de comunicación de masas (Huntington, 1972), el bajo nivel de democratización –entendida como igualación de las condiciones sociales (Tocqueville, 1957)– y de movilización política (Huntington, 1972; O'Donnell, 1972), el Estado oligárquico y el predominio de los regímenes dictatoriales¹ produjeron

1. Para una necesaria distinción entre Estado y régimen político ver: Cardoso, 1985; y O'Donnell, 1985.

una baja densidad institucional, no estimularon una diferenciación institucional significativa y propiciaron más bien el patrimonialismo como forma predominante de funcionamiento de las instituciones del Estado, los partidos y la sociedad civil.

2. La diversificación gradual de la economía de exportación hacia al desarrollo de la industria, la emergencia relativamente significativa del empresariado, las clases medias y las clases populares, el mayor nivel de modernización cultural y de movilización social, el incremento de la democratización social y de la movilización política, la crisis del Estado oligárquico y la formación de una nueva coalición populista así como los regímenes democráticos –cualquiera sea la forma que ellos asumieron²– estimularon la especialización funcional de las instituciones, incrementaron parcialmente su densidad y combinaron el patrimonialismo, el populismo y criterios representativos en el funcionamiento de las mismas.

3. La estatización de los enclaves y la profundización parcial de la industrialización, el mayor desarrollo del empresariado, las clases medias y populares, los acelerados procesos de modernización cultural y movilización social, el impulso a la democratización social desde arriba y el control de la movilización política, el Estado populista y el régimen autoritario del mismo carácter expandieron las funciones estatales, especialmente las de acumulación, estimularon su especialización funcional, inmovilizaron parcialmente a los partidos políticos, propiciaron un desarrollo controlado de la sociedad civil y propiciaron igualmente una forma corporativa en el funcionamiento de las instituciones.

4. El agotamiento de la sustitución de importaciones, la crisis del empresariado y la pauperización e informalización de las clases medias y populares, el ascenso de la modernización cultural y la movilización social, el relativamente alto nivel de democratización social y de movilización política, los intentos de construcción del Estado del gran capital, la apertura y la vigencia de los regímenes democráticos –aunque asumieron un carácter delegativo (O'Donnell, 1994)– produjeron desbordes democratizadores, afectaron la especialización funcional de las

2. Para el análisis de las diversas formas que puede asumir la democracia ver: Macpherson, 1981; Held, 1987; Held, 1993; Sartori, 1988.

institucionales, especialmente del Estado y corroyeron su densidad institucional. Estos efectos fueron agravados y acelerados por la violencia política y el narcotráfico en la década del 80.

5. La globalización de la economía, la política, la tecnología, la comunicación y la cultura, el debilitamiento del empresariado y la pauperización e informalización de las clases medias y populares, la ampliación de la modernización cultural y la movilización social, el descenso del nivel de la democratización social y de la movilización política, la crisis y el repliegue del Estado, y la emergencia de regímenes personalistas y autoritarios han estimulado un proceso de desinstitucionalización en el Estado, los partidos y la sociedad civil y han planteado la necesidad de un rediseño general de las instituciones. En este breve ensayo se ha recurrido a estos diversos factores para bosquejar el desarrollo de las instituciones, pero los criterios de periodización que aquí se proponen son la forma Estado y el régimen político.

I. LA LARGA TRANSICION (1956-1968)

A mediados de la década del 50 se inicia un período de transición socio-política del Estado oligárquico al Estado populista. Sus características principales son las siguientes:

- a. Diversificación de la economía agrominero-exportadora al desarrollo de la industria y del mercado interno (Thorp y Bertram, 1985).
- b. Emergencia de un débil sector empresarial, crecimiento de las clases medias y del proletariado urbano-industrial (Thorp y Bertram, 1985; Sulmont, 1977).
- c. Acelerado proceso de modernización cultural y movilización social (Cotler, 1976) canalizado por masivas migraciones del campo a la ciudad, por la urbanización acelerada, por el crecimiento del alfabetismo y por la explosión de la educación secundaria y universitaria y por el desarrollo de los medios de comunicación de masas (Bourricaud, 1967; Rodríguez, 1992).
- d. Amplio proceso de democratización y de movilización política de las clases medias y populares, urbanas y rurales (Sulmont, 1977; Cotler, 1976).

- e. Tránsito del Estado oligárquico al Estado populista, generando tensiones en la coalición oligárquica y estableciendo equilibrios precarios entre ésta y la nueva coalición populista, combinando la forma patrimonial de dominación con la forma participativa, incorporando en forma segmentaria al APRA a la coalición oligárquica y produciendo contradicciones entre las políticas oxtodoxas y las políticas populistas (López, 1991).
- f. Régimen político democrático, con predominio del Ejecutivo en una primera etapa y del Parlamento en la segunda, basado en un pluripartidismo moderado.

Este período comprende dos etapas separadas por el pequeño interregno del golpe institucional de 1962–1963: la del gobierno de la conviencia (1956–1962) y la del gobierno de la Alianza de Acción Popular con la Democracia Cristiana (1963–1968).

1. *La crisis de la coalición oligárquica (1956–1962)*

Las pugnas de Odría con la oligarquía por sus veleidades populistas en los últimos años de su gobierno y la disponibilidad del APRA a establecer una alianza con la fracción dominante que le ofreciera mejores condiciones políticas de integración al sistema político, favorecieron la incorporación segmentaria del APRA (Cotler, 1978) al Estado oligárquico a través del pradismo primero y después de 1959 al conjunto de la coalición dominante. Esa incorporación permitió al APRA canalizar parcial y fragmentariamente las demandas populares y neutralizar a los sectores más movilizadas (Cotler, 1985). El efecto más importante fue, sin embargo, el contrario: esa incorporación incapacitó al APRA para canalizar la presencia de las nuevas clases medias y populares movilizadas y dejó espacios libres para la emergencia de nuevos y dispersos partidos populistas que en la segunda etapa formaron la nueva coalición populista (López, 1991).

Hacia fines de los años '50 la coalición oligárquica rompió su alianza con el gamonalismo, al que abandonó a su suerte y a la iniciativa de los movimientos campesinos, y tendió puentes hacia el incipiente empresariado industrial, hecho éste que se expresó en la nueva Ley de Promoción Industrial de 1959. Las primeras inversiones en la industria provinieron, sin embargo, del capital extranjero y de la oligarquía, los

cuales diversificaron sus intereses sin atenerse a una política nacional de desarrollo industrial que los gobiernos de este período fueron incapaces de diseñar (Thorp y Bertram, 1985).

La descomposición agraria, la crisis del gamonalismo y el avance de la modernización cultural en el campo no sólo potenciaron los movimientos campesinos (Cotler, 1976; Quijano 1967; Neira, 1968; Fioravanti, 1974; Handelman, 1975) sino también las migraciones del campo a la ciudad y con ellas, aceleraron el proceso de urbanización (Matos, 1968; Quijano, 1977) incrementaron el alfabetismo, el desarrollo de la educación (Rodríguez, 1992; Portocarrero y Oliart, 1989) y el fortalecimiento de los medios de comunicación de masas, especialmente de "La Prensa" y El Comercio que ocuparon trincheras ideológicas y políticas distintas: "La Prensa" con la coalición oligárquica y "El Comercio" con las nuevas fuerzas populistas.

De este conjunto de cambios quizá los más veloces fueron la modernización cultural y la movilización social así como la democratización de la sociedad y el proceso de movilización política que, bajo banderas antioligárquicas, democráticas y nacionalistas (Cotler, 1985), lanzó al escenario nacional a los movimientos campesinos, a las nuevas clases medias y a las clases populares urbanas, poniendo en cuestión el orden oligárquico, desbordando sus frágiles instituciones y recreando, de ese modo, el sistema político pretoriano (Huntington, 1972).

Fue este conjunto de cambios en los procesos de modernización social, en la modernización cultural y en la movilización social así como la crisis del Estado oligárquico y la emergencia de nuevas fuerzas reformistas y populistas y, sobre todo, el acelerado proceso de democratización y de movilización política que desbordaba los estrechos marcos institucionales, el que impulsó la modernización de la Iglesia y de las FF.AA. especialmente del Ejército a partir de 1956. Un poco antes, en 1953, éste había creado el CAEM y en 1954, la Escuela Superior de Guerra y un poco más tarde, el Servicio de Inteligencia (Villanueva, 1972; Villanueva, 1973). Estas instituciones militares no sólo contribuyeron a la profesionalización e institucionalización del Ejército sino también a su reorientación ideológica y política de carácter reformista en la cual jugó un papel importante la teoría de la Seguridad Nacional que vinculaba la seguridad interna con el desarrollo nacional (Mercado, 1964; Rodríguez, 1983; Kruijt, 1991).

2. *Un equilibrio precario (1963–1968)*

Ante la incapacidad de la oligarquía de organizarse políticamente como partido, el APRA apareció en 1962 encabezando la coalición oligárquica en disputa con la Unión Nacional Odrista (UNO) que articulaba al gamonalismo y a las clientelas urbanas de los barrios marginales (Cotler, 1978). Ambos enfrentaron a los nuevos partidos reformistas y populistas dispersos produciéndose un impase electoral cuando Haya de la Torre no alcanzara el tercio constitucional para ganar la Presidencia de la República (Cotler, 1978). Luego de arduas negociaciones entre Belaúnde, Haya y Odría y del acuerdo final entre los dos últimos para elegir a Odría Presidente de la República y entregar el control del Parlamento al APRA, el 18 de junio de 1962 se produjo un nuevo golpe antiaprista que era al mismo tiempo el primer golpe institucional y antioligárquico de la historia política peruana. Pese al carácter institucional del golpe, la Junta Militar de Gobierno de entonces y las FF.AA. se vieron tensionadas internamente y tuvieron que enfrentar el dilema de la criollización o la radicalización (Bourricaud, 1967), optando por la primera y abriendo paso a nuevas elecciones generales en las que triunfó la nueva coalición populista de Acción Popular con la Democracia Cristiana. Las medidas más importantes de la JMG fueron la aplicación de la Reforma Agraria en La Convención y la creación del Instituto Nacional de Planificación (Cotler, 1978).

Luego de nuevas negociaciones entre Acción Popular, el APRA y la Unión Nacional Odrista para establecer una fórmula viable de gobierno, se produjo la alianza entre estas dos últimas fuerzas que pasaron a controlar el Parlamento, estableciendo un equilibrio precario con la coalición populista que dirigía el poder Ejecutivo. Poco a poco el equilibrio se fue transformando en supremacía de la coalición oligárquica, lo que significó un freno a las reformas antioligárquicas que impulsaba la coalición populista, la imposición del patrimonialismo y de la incorporación segmentaria sobre la participación y las políticas de inclusión, el desplazamiento gradual de las políticas públicas heterodoxas para aplicar, finalmente, las políticas ortodoxas. Estas se aplicaron al final del gobierno de Belaúnde cuando se produjo el estrangulamiento externo que expresaba la culminación de la fase sustitutiva de importaciones impulsada desde los años finales de la década anterior (Thorpe y Bertram, 1985; Fitzgerald, 1981). Lo que impidió superar este equilibrio precario, que no se tradujo en equilibrio de poderes sino

en bloqueos políticos del Parlamento al Ejecutivo, fue no sólo la confrontación entre la coalición oligárquica y la coalición populista sino el viejo conflicto no resuelto entre el APRA, por un lado, y el Ejército y "El Comercio", por otro.

El juego político paralizante entre la coalición oligárquica y la coalición populista no detuvo, sin embargo, la modernización cultural y la movilización social como tampoco la democratización social y la participación política que tendieron a desbordar los marcos institucionales del Estado y de los mismos partidos políticos del Gobierno y de la oposición y a reeditar el sistema político pretoriano.

La década del '60 presentó otro mapa institucional como resultado de los acelerados cambios de la década anterior y de los que en ella misma se produjeron. En su organización y funcionamiento, ese mapa—como producto del equilibrio precario entre la coalición oligárquica y la coalición populista— combinó el tradicional criterio patrimonialista con la lógica participativa del populismo. Las instituciones más importantes del país experimentaron modificaciones significativas, aparecieron otras igualmente importantes y se ensanchó el espacio que ocupaban. Las Fuerzas Armadas consolidaron su desarrollo profesional y su grado de institucionalización. La Iglesia Católica presentó un rostro moderno más acorde con los nuevos tiempos que vivían el Perú y América Latina y que el Concilio Vaticano II animó. Junto a ella se expandió y consolidó un nuevo poder espiritual: los medios de comunicación de masas. Los viejos diarios se modernizaron, aparecieron otros nuevos, se organizaron cadenas de radio y surgieron las primeras estaciones de TV de enorme gravitación en la opinión pública (Gargurevich, 1977; Gargurevich, 1987). El APRA dejó de ser el partido mayoritario del país para convertirse en el partido de un tercio electoral (Tuesta, 1987; Roncagliolo, 1980).

En esta década el Estado redefinió parcialmente sus funciones. Además de las viejas funciones coercitivas, el Estado ensanchó sus funciones sociales e incrementó su intervención en la economía, especialmente en los sectores metalúrgico, hidroeléctrico y bancario, hasta devenir un Estado promotor del desarrollo. El primer paso en esa dirección fue la creación del INP en 1962 por la JMG de entonces. Belaúnde dio algunos pasos en esa misma dirección: creación de los Ministerios de Agricultura y de Transportes y fortalecimiento de la

Banca de Fomento. Teniendo como referencia la década anterior, los gastos de acumulación subieron a más del 18% del gasto público entre 1963 y 1968; los de seguridad descendieron a alrededor del 16%; los gastos sociales o de legitimación del Estado se dispararon al 35% y los gastos generales bajaron al 30%.

Los aparatos representativos del Estado y de la sociedad política se desarrollaron gracias a la emergencia de nuevos partidos y a la expansión de la participación política ciudadana, pero no llegaron a consolidarse: en la década se produjeron los golpes de Estado de 1962 y de 1968. A partir de 1963 resurgieron los municipios como nuevos espacios electoralmente representativos que, sin embargo, fueron copados por los personeros de los poderes locales que eran también dirigentes partidarios. Los aparatos económicos del Estado se fortalecieron parcialmente y se desprivatizaron: El gobierno de Belaúnde prescindió de los representantes de las instituciones privadas presentes en el BCR y estatizó la Caja de Depósitos y Consignaciones transformándola después en el Banco de la Nación.

Los aparatos estatales de salud y sobre todo los de educación—debido a la expansión explosiva de la educación secundaria y universitaria— se ensancharon. En 1972, el 78.3% de la población entre 6 y 14 años, el 47.4% del grupo de 15 a 19 años y el 15.9% del grupo de 20 a 24 años asistían a algún centro educativo (Rodríguez, 1992). Los gastos en educación fluctuaron entre 19% y 30% de los gastos fiscales (Portocarrero y Oliart, 1989). Los gastos en salud, en cambio, disminuyeron (Fitzgerald, 1981). Estos aparatos de legitimación se vieron reforzados con la creación de las instituciones estatales destinadas a atender el problema de la vivienda en las ciudades, especialmente para las clases medias, y de Cooperación Popular que actuaba tanto en las ciudades como en el campo. La policía y el poder judicial expandieron su radio de acción sobre todo en el campo gracias a la crisis generalizada e irreversible del gamonalismo.

En los '60 la sociedad política pasó de una situación de partido predominante de las tres décadas anteriores a una de pluripartidismo moderado sin llegar a configurar un sistema de partidos debido a que entre ellos predominaba más la confrontación que la negociación (Cotler, 1988). Ella fue poblada por nuevas fuerzas políticas: Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Social Progresismo y los pequeños y dispersos partidos de la nueva izquierda que configuraron galaxias y

nebulosas partidarias (Letts, 1981). Se debilitó en parte el caudillismo oligárquico pues se extinguió el Movimiento Democrático Peruano (antes Pradista), pero se mantuvo con cierta fuerza la Unión Nacional Odrista, el último bastión partidario de la oligarquía y el gamonalismo.

Sin lograr autonomía frente al Estado y a los partidos, la sociedad civil inició un acelerado crecimiento en la década del '60. La Iglesia católica mantuvo su relación privilegiada con el Estado que la Constitución de 1933 le autorizaba, pero dentro de nuevas orientaciones modernas y reformistas y con una apertura significativa a los problemas sociales de las clases populares (Klaiber, 1987). Como ya se dijo, se renovaron los viejos diarios, aparecieron otros nuevos ("Expreso", "Ultima Hora", "El Diario", "El Gráfico"), se expandió la radio y se organizó en cadenas nacionales y aparecieron las primeras estaciones de TV. Emergieron nuevas universidades privadas que poco a poco fueron desplazando a las universidades nacionales en la producción de ideologías y cuadros políticos y técnicos. Las universidades nacionales crecieron en número, se masificaron y entraron en crisis. El movimiento universitario tuvo un desarrollo significativo también en esa década. La Sociedad Nacional Agraria (SNA) se debilitó y la Sociedad Nacional de Industrias fue rompiendo lentamente amarras con la oligarquía e incrementando su organización con la incorporación de nuevos comités industriales (Durand, 1989).

Nuevos gremios de clase media –bancarios y maestros primarios y secundarios– fortalecieron el movimiento sindical. La sindicalización creció rápidamente tanto en la ciudad como en el campo, impulsada esta vez más por el Partido Comunista y la nueva Izquierda que por el APRA. Nuevos sindicatos y federaciones vinculados a las nuevas empresas y ramas industriales y nuevos sindicatos y organizaciones rurales, incluso en las haciendas tradicionales, hicieron su aparición en el escenario social. Entre 1962 y 1968 se registraron 1,248 asociaciones sindicales, casi cuatro veces más que en el período 1946–1962, la mayoría de ellas en la industria y el comercio y casi un tercio en la agricultura. En disputa con la CTP, comenzó a reorganizarse la vieja CGTP incrementando el nivel de centralización del movimiento sindical (Sulmont, 1977). Aunque en estrecha relación con la política clientelista del Estado y de los partidos (Collier, 1978), las asociaciones de pobladores canalizaban la presencia de los numerosos barrios marginales de Lima y de otras ciudades importantes del país en la sociedad civil.

Las viejas instituciones rurales entraron en crisis como producto de la modernización cultural y del proceso de movilización política. La crisis fue aguda e irreversible en las haciendas tradicionales. Las comunidades y los campesinos serviles iniciaron un proceso significativo de movilización y sindicalización (Cotler, 1976; Handelman, 1975; Kapsoli, 1977). La pequeña propiedad se expandió a costa de la hacienda tradicional (Dancourt, 1980).

El mapa institucional del '60 siguió siendo principalmente urbano. Ello no obstante, el número de agencias institucionales creció en el campo. La presencia de la parroquia, la comisaría, la escuela primaria, el municipio y la agencia del Banco de la Nación fue creciente en las capitales de los distritos tanto urbanos como rurales.

II. EL VELASQUISMO Y LA EXPANSION DEL ESTADO (1968-1980)

La estéril confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la competencia por atender demandas a través del gasto público en lugar de las reformas (Cotler, 1985) y el estrangulamiento externo debido a las exigencias de importación de insumos y bienes de capital de la industria y a la crisis del sector exportador, produjo una crisis económica y una crisis política que dividió a la alianza del Gobierno -AP y la DC se separaron y cada una de ellas se dividió saliendo del gobierno las alas populistas radicales de ambos partidos- y también a la coalición APRA-UNO el Partido Social Democrático (PSD), liderado por Julio de la Piedra, se separó de la UNO para reformular una nueva alianza con el APRA- con miras a recomponer entre AP, el PPC, el APRA y el PSD la coalición del gran capital en el gobierno -el capital extranjero, la oligarquía y el sector empresarial- enfrentando a una oposición dispersa de partidos populistas radicales, un partido caudillista y clientelista (UNO) y una embrionaria fuerza de izquierda marxista.

Apelando al fracaso, al entreguismo y a la inmoralidad, un grupo de oficiales radicales encabezó el golpe del 3 de Octubre de 1968 que pronto devino institucional y que, como tal, cerró el camino a la coalición del gran capital y abrió paso a un Estado populista, apoyándose en sus propias instituciones militares y en los pequeños partidos populistas radicales que habían sido excluidos por el gobierno de Belaúnde. La coalición dominante del Estado populista estuvo integrada por los militares, sectores tecnocráticos, sectores empresariales y el mismo ca-

pital extranjero al que, sin embargo, se trató de ponerle límites y de subordinarlo. Esa coalición apeló al corporativismo y a la participación como forma de dominación, desarrolló una amplia política de inclusión y desplegó, además de una serie de reformas que acabaron con la oligarquía, el gamonalismo y el enclave, agresivas políticas públicas heterodoxas: control de cambios, políticas arancelarias favorables a las importaciones, una política expansiva del gasto público apelando al endeudamiento externo y el control de precios que favorecían a la industria y a la ciudad (Lowenthal, 1985).

El Gobierno de Velasco aceleró el proceso de modernización profundizando parcialmente la industrialización e impulsando el capitalismo de Estado (Fitzgerald, 1981). Con ello y con las políticas públicas heterodoxas, fortaleció a los sectores industriales, a las clases medias y a las clases populares urbanas. Esas diversas políticas del Gobierno aceleraron la modernización cultural y la movilización social que venían desarrollándose desde los '60 y alentaron sobre todo un amplio proceso de democratización desde el Estado, tratando de controlar la movilización política autónoma a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), sin lograrlo.

El régimen político de Velasco fue una dictadura populista cuyo poder reposó en la FF.AA. "que asumió funciones y atribuciones de una clase social dirigente que buscaba reordenar la sociedad y el Estado, adecuándolo a sus aspiraciones y propósitos" (Cotler, 1985). En virtud de esas atribuciones, las FF.AA. "pretendieron absorber y monopolizar el Estado, encerrando en sus filas toda la vida política de la sociedad peruana" (Cotler, *Ibidem*). La Constitución fue reemplazada por el Estatuto de la Revolución, las funciones ejecutivas y legislativas fueron unificadas bajo un solo comando, el poder judicial fue sometido al Ejecutivo, el Presidente de la República y su sucesión dependía de la Junta Revolucionaria integrada por los comandantes de las tres armas, los ministros fueron nombrados por el Presidente de la República y el Comité de Asesoramiento de la Presidencia (COAP), además de asesorar al jefe del Estado, cumplía también funciones legislativas (Guerra, 1983). Los partidos políticos, especialmente el APRA, Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC), fueron combatidos y acusados de ser los reponsables de la dependencia y el atraso del país y de haber claudicado y traicionado las expectativas de sus seguidores. Se les consideró innecesarios, por cuya razón el Gobierno se negó a or-

ganizar un partido propio y postuló más bien la tesis del "no partido". Los medios de comunicación de masas fueron expropiados y controlados por el Gobierno.

El control de la movilización política fracasó. Desde 1973 se reactivó la sociedad civil y se inició un movimiento de reivindicaciones y de protesta por parte de los sindicatos y las federaciones de trabajadores. A partir de entonces comenzaron a surgir diversas tendencias entre los oficiales radicales que habían impulsado el golpe. Ellas se acentuaron con los primeros síntomas de la crisis económica y con la enfermedad de Velasco (Franco, 1983). El golpe institucional de Morales Bermúdez buscó recomponer la unidad de las diversas tendencias político-militares, pero terminó exacerbándolas al sacar de la coalición dominante, a las tendencias populistas radicales para sentar las bases de la coalición del gran capital. Morales inició la desactivación de las medidas radicales de Velasco y aplicó las políticas públicas ortodoxas que desataron paros masivos y grandes movimientos de protesta. Ante la presión del APRA y el PPC y de los movimientos sociales, y de los mismos sectores institucionalistas de las FF.AA., Morales se vio obligado a abrir el proceso de transición de 1978-1980, convocando a elegir una Asamblea Constituyente e imponiéndose sobre los militares que propugnaban una tercera fase (Lynch, 1992). Los resultados electorales de 1978 configuraron un mapa electoral de tres tercios que se mantuvo hasta 1989 y que expresaba las tendencias de derecha, de centro (APRA) y de izquierda.

El mapa institucional de la década del setenta tuvo los rasgos más o menos típicos de todo régimen militar autoritario: preeminencia de las FF.AA. y del poder Ejecutivo, eliminación del Legislativo y subordinación del poder judicial. Ese mapa mostró asimismo la expansión de los aparatos estatales, especialmente de los económicos y, dentro de ellos, de las empresas públicas, la hibernación de la sociedad política —al menos hasta 1973, año en que se reactivó la oposición partidaria— y crecimiento controlado de la sociedad civil por parte del Estado.

El desplazamiento del gran capital en octubre de 1968, la eliminación posterior de la coalición oligárquica y el predominio de la coalición populista permitieron al velasquismo organizar las instituciones estatales e incidir en la formación de las organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a la lógica de participación y a criterios corporativos. Pese

a la introducción de nuevas lógicas en la organización de las instituciones, éstas se hibridaron con los elementos tradicionales del patrimonialismo: "El Estado todavía no ha sido capaz, entre nosotros, no obstante esfuerzos laudables, de modernizarse a sí mismo definitivamente. Sigue funcionando aquí como un híbrido de las modernas burocracias y del Estado patrimonialista español de los siglos XVI, XVII y XVIII" (Basadre, 1979, p.11). Uno de los rasgos de las élites tradicionales peruanas pareciera ser la utilización de formas –instituciones, valores– modernas, interpretarlas con códigos tradicionales para reforzar su forma de dominación, dando lugar a una modernización tradicionalista (Trazegnies, 1992) o a la contramodernidad (Nugent, 1992).

Además de las tradicionales funciones de seguridad y de legitimación, el Estado desplegó agresivamente una función de acumulación. El sector público pasó de producir el 7.8% del valor agregado en 1955 y el 11.4% del mismo en 1970 al 21.45% en 1975, la inversión fija pasó de 3.9% y 4.5% del PBI a 8.8% en los mismos años y el empleo pasó del 10% y el 15% del empleo no-agrícola al 24% en el mismo período: "Durante el período 1955-1975, el valor agregado del sector estatal aumentó ocho veces, el empleo casi nueve veces, la participación en la inversión pasó a ser casi la mitad del total nacional, y la proporción de la inversión privada, financiada por los bancos estatales, aumentó del 5% al 30%. Además, la participación del Estado en las exportaciones aumentó de casi cero a 9 décimos en 1975, y la participación en las importaciones de menos de un décimo a casi la mitad del total. En otros términos, el Estado se había convertido en una fuerza predominante en la economía" (Fitzgerald, 1981, pp. 244-245). La ampliación de las funciones económicas del Estado exigió un aparato institucional acorde con ellas. Se amplió el Ministerio de Agricultura para impulsar la Reforma Agraria, se creó el Ministerio de Alimentación, el de Industria, el de Comercio, el de Pesquería y el de Energía y Minas, se transformó el de Hacienda en uno de Economía y Finanzas y se fortaleció el INP dándole el control de todas las inversiones del sector público y la responsabilidad de la política económica de largo plazo (Fitzgerald, 1981).

Las funciones (sociales) de legitimación del Estado en esta década se debilitaron con respecto a la anterior, lo que se expresó en la estructura de los gastos fiscales. El gasto en educación fluctuó entre 19% y 29% (Portocarrero, 1981), pero la cobertura se amplió: en 1981, el 89.8% de

la población entre 6 y 14 años; el 54.3% del grupo entre 15 y 19 años y el 23.8% del grupo entre 20 y 24 años asisten a algún centro educativo (Rodríguez, 1992).

Las funciones de seguridad del Estado se consolidaron, sobre todo luego del golpe de Pinochet en Chile, a partir del cual se incrementaron en forma significativa los gastos militares. Pese al manejo institucional del Gobierno, las Fuerzas Armadas se vieron tensionadas por tendencias políticas que operaban en su seno y ponían en riesgo su unidad institucional (Franco, 1983).

Las redefiniciones de las funciones del Estado se reflejaron en la estructura del gasto público. Los gastos de acumulación fluctuaron entre 18.3% y 15.9% entre 1969-75 (Velasco) y 1976-80 (Morales), los de legitimación descendieron de 24.9% durante el Gobierno de Velasco a 19.5% durante el Gobierno de Morales; los gastos de seguridad y defensa subieron al 25% durante ambos gobiernos y los de la deuda externa subieron de 20.4% en la primera fase al 32.1% en la segunda fase (Jurado, 1994).

La sociedad política se vio paralizada durante la primera fase del Gobierno Militar no tanto por la represión contra los dirigentes políticos como por la crítica gubernamental contra ellos y por la espectacularidad de las reformas largamente predicadas por los partidos reformistas que, sin embargo, fueron incapaces de realizarlas. Sólo a partir de 1973, los partidos políticos de diversas orientaciones ideológicas, iniciaron una ofensiva contra Velasco, aprovechando la reactivación de la sociedad civil, en particular la del movimiento sindical (Sulmont, 1977). Los partidos se vieron polarizados en su organización y funcionamiento por dos lógicas contrapuestas: el populismo y el liberalismo. En febrero de 1975 reaparecieron el APRA y algunos sectores de la izquierda marxista con motivo de la huelga policial de entonces. Los partidos encontraron un mejor clima para sus actividades con el golpe de Morales Bermúdez en agosto de 1975 y sobre todo con la apertura a la transición democrática a partir de 1977. En esta década se consolidaron, acompañando e impulsando los vigorosos movimientos sociales entre 1976 y 1980, el clasismo (Balbi, 1989) y los fragmentados partidos de izquierda radical, como nuevos e importantes actores en el escenario político. En las elecciones que dieron origen a la Asamblea Constituyente en 1978, el mapa partidario apareció dividido en tres tercios proporcionalmente repartidos entre la derecha (PPC apoyado por AP

que se abstuvo), el centro (APRA y otros partidos menores) y las izquierdas que, pese a la formación de frentes, mantenían aún su dispersión. El intento de centralizarla en la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) para enfrentar el proceso electoral de la Asamblea Constituyente fracasó.

La sociedad civil perdió la poca autonomía que venía conquistando y se expandió bajo los auspicios del gobierno, especialmente a través del SINAMOS. La Iglesia acentuó su orientación reformista respaldando abiertamente al gobierno (Klaiber, 1987; Klaiber, 1988) y abriendo un espacio, sin que la jerarquía se lo propusiera, a corrientes radicales en su seno (Pásara, 1986). Los grandes diarios, las cadenas de radio y la TV fueron expropiados por el gobierno (Gargurevich, 1991). La Sociedad Nacional Agraria (SNA) fue desconocida, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) fue transformada en Sociedad de Industrias (SI) y se respaldó la organización de la Asociación de Exportadores (ADEX) (Durand, 1982). Los sindicatos se expandieron, aceleraron su centralización y muchos de ellos defendieron arduamente su autonomía. En 6 años (1969-1975) el gobierno reconoció a 2,066 organizaciones sindicales, casi el doble de las reconocidas en los doce años anteriores (Sulmont, 1977). Los maestros de todos los niveles se organizaron en el SUTEP en 1971, superando su dispersión anterior. La CGTP de orientación izquierdista fue reconocida y fortalecida para opacar a la CTP de orientación aprista y se crearon más tarde, con la finalidad de hacer lo mismo con la CGTP y con otras organizaciones sindicales clasistas, la CTRP, el SERP, la CNA y el MLR que, con excepción de este último, asumieron una posición de izquierda en la segunda fase. Hacia 1977, 65% de los trabajadores afiliados a centrales o federaciones sindicales pertenecían a la CGTP o a alguna base clasista no afiliada a ninguna central (Parodi, 1985). Se reconoció masivamente a las comunidades campesinas, se crearon las cooperativas agrarias, se impulsó la formación de otras organizaciones rurales al mismo tiempo que se liquidaba tanto la plantación como la hacienda tradicional (Béjar y Franco, 1985).

La expansión de las instituciones estatales en las áreas rurales, sobre todo a través de proyectos en el campo (Giesecke, 1989) y el crecimiento de las organizaciones rurales hizo que el mapa institucional se ensanchara en esa área, sin dejar, por ello, de ser predominantemente urbano.

III. LA DÉCADA CRÍTICA Y VIOLENTA Y EL DESMORONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES (1980-1992)

Ante una izquierda fragmentada y una APRA apoyada por la dictadura, Belaúnde recogió el estado de ánimo antidictatorial del electorado y triunfó en las elecciones de Abril de 1980. Se inició entonces un período de consolidación democrática que se vio asediado por la violencia desatada por el terrorismo, por la crisis económica y por la deuda externa. Si dicha consolidación fracasó, ello se debió a la incapacidad de los gobiernos para resolver tanto los problemas de la herencia autoritaria anterior –el secreto Sistema de Defensa Nacional y el Estado sobrecargado– como los problemas institucionales –crisis de los partidos y de los mecanismos de intermediación– y los problemas estructurales que tenían que ver con la crisis económica y la violencia política (López, 1994).

La década del '80 para los peruanos no es sólo una década perdida sino también una oportunidad desperdiciada. En lugar de abrir nuevos caminos al país, las dos etapas en que se divide este período constituyen un retorno al pasado y a las experiencias políticas que ya habían fracasado. Lo que explica al parecer esta tendencia a repetir las experiencias fracasadas de políticas liberales exportadoras y políticas populistas pro-industriales es la existencia de "dos ejes económicos desarticulados": el sector exportador y el sector industrial.

En resumen, el patrón cíclico de la economía peruana de 1963 en adelante parece ser el siguiente: "La expansión económica tiene como base la disponibilidad de divisas, ya sea por el auge exportador, por el ingreso de capitales o por el endeudamiento externo; sin embargo, las divisas se agotan en función directa del crecimiento del nivel de actividad económica. Por otro lado, la expansión alcanza sus límites en la capacidad instalada y en la disponibilidad de recursos productivos, aún sin agotar reservas internacionales. A partir de este momento las presiones inflacionistas comienzan a hacerse sentir. En ambos casos, la situación económica tiende al deterioro y se hacen necesarias medidas correctivas, que significan el retorno a la ortodoxia liberal pro-exportadora, pues se requiere volver a generar divisas para el funcionamiento del otro eje" (Gonzales de Olarte y Samamé, 1991, p. 57).

1. *La fracasada coalición del gran capital (1980-1985)*

En el primer año de su Gobierno, Belaúnde se dedicó a desmontar las reformas de Velasco, entre ellas a devolver los medios de comunicación a sus antiguos propietarios, y a revisar una serie de dispositivos legales que eran herencia de las dictaduras anteriores. Cuando intentaba impulsar la modernización económica abriendo la economía al mercado internacional para hacerla competitiva, el Gobierno se vio limitado por el proteccionismo norteamericano y por la baja de los precios internacionales de las materias primas en 1982 (Gonzales de Olarte y Samamé, 1991), así como por las lluvias torrenciales en el norte y la sequía en el sur en 1983. El proceso de modernización se paralizó y la aplicación de las políticas públicas liberales afectaron a las clases populares y medias que se vieron sometidas a un proceso de informalización creciente. Ello no obstante, el proceso de modernización cultural siguió adelante así como la movilización social desbordando las instituciones existentes, generando las bases de la inestabilidad política y recreando el sistema político pretoriano.

Esta paralización de la modernización se vio agravada por la exclusión económica —el desempleo y el subempleo creciente— el servicio de la deuda y la violencia política que atentaron contra el proceso de democratización y contra la movilización política de las clases populares, minando la consistencia de la sociedad civil y de los partidos políticos.

2. *El retorno del populismo y el colapso institucional (1985-1990)*

Fracasado el tibio liberalismo de Belaúnde, el país volvió los ojos al populismo eligiendo a Alan García en 1985 y colocando a la izquierda en un expectante segundo lugar.

García pretendió reconstruir el Estado populista conformando una nueva coalición populista dominante —compuesta por un sector de los empresarios (“los doce apóstoles”) y las clases medias —mediante el enfrentamiento a los organismos financieros internacionales y la fijación de sólo el 10% de las exportaciones al pago de la deuda externa así como mediante el impulso de una política expansiva del gasto público para reactivar la economía. Esta medida fue acompañada por otras políticas públicas heterodoxas: establecimiento de diversos tipos

de cambio, políticas arancelarias favorables a la importaciones de insumos y bienes de capital, dación de crédito cero para el campo, control de precios a los alimentos para favorecer a los consumidores urbanos. A mediados del 87 se comenzaron a sentir los efectos del estrangulamiento externo: falta de divisas, devaluación de la moneda e inflación. A través de estas políticas públicas, la coalición dominante procesó una forma de dominación patrimonial y participativa y buscó desarrollar una vasta política de inclusión, pero no lo consiguió debido al estallido de la crisis económica en 1988. La coalición populista estalló con la estatización de la banca en julio de 1987: los empresarios se distanciaron violentamente de Alan García y las clases medias se replegaron en forma gradual.

Rota la coalición populista, el Gobierno de Alan García apareció muy débil hacia el final de su mandato. García pretendió superar esa situación creando los gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía de sus respectivas regiones, sin ofrecerles, sin embargo, ni las atribuciones ni los recursos económicos necesarios para consolidarse. A diferencia de los primeros años de su Gobierno en los que García concentró el poder y lo administró como patrimonio propio, fortaleciendo el Poder Ejecutivo y transformando al Parlamento en su apéndice debido a la sumisión de la mayoría parlamentaria, luego de la descomposición de la coalición populista aparecieron condiciones para el equilibrio de los poderes del Estado.

Alan García buscó impulsar la modernización apoyando la industria sustitutiva de importaciones, la misma que mostró rápidamente sus límites cuando en 1987 se produjo el cíclico estrangulamiento externo. Para enfrentarlo, García se vio obligado a aplicar políticas ortodoxas sin lograr un resultado exitoso. Por el contrario, la inflación, la recesión y la crisis fiscal se intensificaron, afectando no sólo a las clases medias y populares sino también a los empresarios. La sociedad civil se vio debilitada así como el conjunto del aparato institucional del Estado.

Los procesos de modernización cultural y de movilización social se vieron afectados por la aguda crisis económica y por la violencia política. Lo mismo sucedió con los procesos de democratización y de movilización política, corroyendo principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y la dinámica de los partidos políticos.

El fracaso del Gobierno aprista en el enfrentamiento a la crisis económica –sobre todo en el control de la inflación– y de la violencia terrorista así como el hundimiento de los países comunistas y la crisis y división de la izquierda hundieron a los partidos que hasta entonces se mantenían en pie. La primera señal de esa debacle fue la elección de Ricardo Belmont como Alcalde de Lima, en noviembre de 1989. La elección de Fujimori en 1990 y las elecciones que se llevaron a cabo después han consolidado el éxito de los independientes y el hundimiento de los partidos políticos así como el desprestigio de la política.

El mapa institucional del '80 revela el desmoronamiento de las instituciones tanto del Estado como de la sociedad política y de la sociedad civil. Las fuerzas liberales que triunfaron en el '80 no tuvieron la fuerza ni el interés para reordenar el aparato institucional en términos liberales y representativos. Ellas mantuvieron el conjunto de las instituciones y prácticas populistas combinándolas con elementos patrimonialistas y representativos. Estas orientaciones de política institucional del período 1980-1985 se potenciaron en el período 1985-1990 (López, 1991). Los altos mandos de la administración pública no se seleccionaron de acuerdo a criterios profesionales sino por el criterio de "los cargos de confianza" que se expandieron hasta el nivel de las subdirecciones y el personal administrativo de apoyo creció vertiginosamente en cada uno de los gobiernos como una forma de pagar favores a sus leales partidarios, familiares y amigos (Giesecke, 1989). Los cuadros técnico-profesionales de alto nivel no tenían la suficiente duración para desarrollar políticas estables de largo aliento: "Yo fui un director de contribuciones –dice Armando Zolezzi– excepcionalmente longevo, duré dos años y dos meses, entre 1980 y febrero de 1982, sin embargo de febrero de 1982 a la fecha (junio de 1986) me han sucedido ocho directores generales de contribuciones. Entonces, si ustedes toman los últimos cuatro años, hemos tenido ocho directores de contribuciones, ni siquiera el tiempo necesario para calentar el asiento, o sea no ha habido ni hay una posibilidad real de poder desarrollar una política administrativa en serio" (Giesecke, 1989, p. 71). Las relaciones que el Estado establece con la población, especialmente aquella de las áreas rurales, son de tipo prebendario y clientelista y la población responde en los mismos términos combinándolos con criterios pragmáticos de costos y beneficios: "Vamos a la comunidad en un carro –dice un funcionario público encargado de dirigir proyectos en el campo– y el campesino a uno le dice, ¿de qué proyecto son Uds?, nosotros traba-

jamos en un proyecto tal, nosotros tenemos tales necesidades, queremos trabajar así y, ¿qué nos van a traer?, materiales, alimentos, etc. El campesino ha distinguido perfectamente qué es el Estado y qué las instituciones que ofrecen y ellos inmediatamente ya tienen su estrategia para poder digerir a las instituciones" (Giesecke, *Ibidem*, p. 104).

El Estado fue paralizado poco a poco en sus funciones y en sus instituciones. Las funciones e instituciones más afectadas fueron las regionales en las que se desarrollaban un conjunto de programas multisectoriales (CORDES, Cooperación Popular, programas de emergencia) cuyos gastos bajaron de 3.2% del gasto público global en el período 1981-1985 a 2.9% en el período 1986-1990 (Jurado, 1994). La disminución de los recursos fiscales de las regiones –basados en la lógica de la transferencia del poder central– fue quizá la principal causa del fracaso de los gobiernos regionales que se crearon en la segunda mitad del Gobierno de García y que contribuyeron a ampliar y fortalecer las instituciones del Estado, sobre todo en el campo. La creación del Ministerio de la Presidencia, en cambio, elevó los gastos generales de 5.1% en 1981-1985 a 9.1% en 1986-1990. La inversión pública se vio paralizada, pues otra de las funciones más afectadas fue la de acumulación cuyos gastos descendieron de 15% en 1976-1980 a 9.7% en 1981-1986 y a 11.4% en 1986-1990. Una suerte parecida corrieron los gastos sociales y de legitimación (salud, educación, vivienda y trabajo) que descendieron de 24.9% en 1969-1975 a 17.0% en 1981-1985 y a 19.6% en 1986-1990 (Jurado, 1994). El gasto público social (educación, salud y vivienda), que llegó al 4% del PBI en la década del '70, descendió al 1.8% en 1991: el gasto social per cápita llegó a 156 dólares en 1970, subió a 184 en 1980 y descendió a 30 en 1991 (CIUP, 1992).

Las funciones e instituciones del Estado menos afectadas fueron las de seguridad (Defensa e Interior) cuyos gastos bajaron de 25.7% en 1976-1980 a 21.8% en 1981-1986, para volver a subir a 25.6% en 1986-1990. Ello no obstante, el Estado se replegó también en sus funciones de seguridad, sobre todo en las áreas rurales de las zonas declaradas en estado de emergencia. Más de un centenar de comisarías se vieron obligados a abandonar sus funciones debido a los ataques de la subversión senderista y emerretista. Lo mismo pasó con una cifra parecida de municipios del país. Las FF.AA. experimentaron un movimiento contradictorio. Por un lado, fortalecieron su poder al llegar a controlar el 40 % del territorio y el 50% de la población a través de los Comandos

Político-Militares, pero, por otro, vieron reducirse sus prerrogativas con respecto al período 1968-1980 en lo que se refiere al Sistema de Defensa, al Servicio de Inteligencia, al manejo presupuestal, a la autonomía para nombrar sus altos mandos y a una serie de prerrogativas personales (Obando, 1993). El Ministerio de Defensa creado por Alan García no logró institucionalizar las relaciones entre los civiles y los militares en un contexto de insurgencia (Mauceri, 1989).

El factor que distorsionó enormemente el gasto público fue el servicio de la deuda externa que ascendió de 32.1% en 1976-1980 a 43.2 % en 1981-1985 para mantenerse luego en 31.1% en 1986-1990.

Hacia fines de la década del '80, el Estado seguía siendo, pese a la crisis económica y fiscal, el empresario más importante del país, pues tenía en sus manos 186 empresas estatales –135 no financieras y el resto financieras– cuyas actividades generaban alrededor del 20% del PBI (Alvarez Rodrich, 1991). Del total de activos las empresas estatales no financieras, 19% pertenecían al sector hidrocarburos, el 29% al de electricidad, el 15% al de minería, 9% al de industria, 7% al de comunicaciones, 7% al de saneamiento y vivienda, 6% al de transporte y 8% a otros sectores. En 1989 los cinco grupos empresariales más importantes del país eran de propiedad del Estado así como siete de los 10 más importantes. En 1987, 12 de las 15 empresas más grandes del país, medidas en términos de ingresos anuales; y en 1988, 13 de las más grandes eran del Estado (The Peru Report, 1989). El Estado peruano monopolizaba la generación de electricidad, agua potable, comunicaciones, la producción de petróleo y gas, controlaba el 35% de la producción minera y el 33% de los servicios de transporte, canalizaban el 28% de las exportaciones y el 26% de las importaciones, respondía por un tercio de la inversión pública que equivalía a 1.5% del PBI y daba empleo en las empresas públicas a 200 mil personas equivalente al 2.6% de la PEA (Alvarez Rodrich, 1991). El valor en libros de los activos de las empresas estatales no financieras era aproximadamente de US \$ 5,500 millones de dólares, equivalente al 95% del patrimonio del Estado (The World Bank, 1988).

La del '80 fue también la década del desmoronamiento de los partidos políticos. En los inicios de la década se configuró un mapa partidario de tres tercios: de derecha (AP, PPC), de centro (APRA) y de izquierda (IU). Ese mapa se mantuvo en los procesos electorales de

1980, 1983, 1985 y 1986. Acción Popular y el Partido Popular Cristiano fueron los primeros que se fueron desmoronando en las elecciones de 1983, 1985 y 1986, luego de su fracaso en el gobierno (1980-1985). Su resurgimiento posterior en el FREDEMO no obedeció a su propia fuerza sino al arrastre del independiente Mario Vargas Llosa. Pero los partidos, sobre todo el APRA y la izquierda en menor medida, siguieron teniendo un peso importante hasta las elecciones municipales de noviembre de 1989 en las que el candidato independiente a la Alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, los derrotó. La votación de todos los partidos juntos apenas superó la del triunfador (Pareja y Gatti, 1993).

Algo parecido sucedió en las regiones y departamentos del interior: los partidos dejaron de ser la primera fuerza política del país para dar paso a los independientes. Las elecciones generales de 1990, en cuya segunda vuelta resultó elegido Alberto Fujimori, confirmaron la tendencia del electorado a prescindir de los partidos y a optar por líderes independientes (Grompone, 1991). Desde entonces el tránsito de los partidos a los outsiders (Cotler, 1994, mimeo) fue acelerado y radical: "En 1986 el 73 por ciento de la ciudadanía simpatizaba con algún partido político y el 17 por ciento se declaraba independiente. En abril de 1993 los simpatizantes se habían comprimido a 12 por ciento y los independientes habían pasado a constituir el 86 por ciento del electorado" (Torres, 1993).

La crisis institucional llegó también a la sociedad civil, pero la suerte de sus organizaciones ha sido diversa. Mientras la Iglesia, los medios de comunicación de masas, especialmente la radio y la TV y, en menor medida, las instituciones culturales (algunas universidades y ONGS) se han fortalecido o han mantenido su vigencia asumiendo una orientación conservadora, las organizaciones gremiales, particularmente las populares, regionales y poblacionales se han debilitado seriamente. El clasismo ha desaparecido y el sindicalismo en general se ha visto mermado en sus filas y se ha vuelto pragmático (Balbi, 1993). Los movimientos campesinos reorientaron sus demandas desde la reivindicación de la tierra en los '60 y '70 a la lucha por una mejor ubicación en el mercado en los '80 (Eguren, 1988), lo que implicó un cambio en las formas de lucha y de organización. Fracasada esta reivindicación frente al gobierno liberal de Belaúnde, Alan García impulsó la participación campesina a través de los masivos Rimanacuys de las comunidades campesinas. El rasgo distintivo de la sociedad civil

en esta década fue su descentralizamiento y la fragmentación sin llegar a la desestructuración ni a la sociedad de masas (Grompone, 1994, mimeo). Ello implicaba que la sociedad había roto con una serie de encuadramientos que le imprimían un cierto nivel de certidumbre y que hacían más o menos predecible su comportamiento. La informalización atravesó el cuerpo entero de la sociedad –la economía, las clases sociales, sus organizaciones tradicionales, las estrategias y formas sindicales de acción, las instituciones, los partidos, el electorado, etc.–, emergieron nuevos sectores y actores sociales, nuevas orientaciones sociales, nuevas formas de relaciones sociales y de comunicación, nuevos espacios económico–sociales, nuevos liderazgos sociales que, sin embargo, no cayeron en la anomia sino que buscaron crear o recrear nuevas formas de comunidad: la familia, el parentesco, las tradiciones de origen, el paisanaje, la fiesta, etc. Las diversas crisis del '80 desorganizaron parcialmente la sociedad pero liberaron, al mismo tiempo, nuevas energías sociales cuyos rasgos aún no han sido analizados con precisión. Se han hecho diversas lecturas de esas energías desatadas –el otro sendero, el desborde popular, la otra modernidad, la conquista campesina de la ciudad y de la ciudadanía, la utopía andina, la reconquista campesina del país, etc.– pero falta aún un balance de los diversos trabajos de interpretación y de los diferentes procesos de desorganización y de recomposición social.

Otro rasgo importante de la crisis de la sociedad civil en la década del '80 fue el debilitamiento de las organizaciones populares cuyo crecimiento en las dos décadas anteriores la habían hecho más densa y le habían impreso un carácter popular. Desde entonces la sociedad civil ha asumido un carácter mesocrático y conservador. En la década del '70 el movimiento sindical y popular fue la columna principal de la sociedad civil. En la del '80, la fuerza gravitante en ella fue "espiritual" y provenía de los medios de comunicación de masas, de la Iglesia y de las ONGs. Las encuestas de opinión revelaban que la Iglesia Católica era la institución más confiable y prestigiada del país, pese a que en su seno se desarrollan tendencias en pugna (una conservadora en la que despuntaba el Opus Dei con poder creciente y otra progresista en repliegue), al estancamiento de la misma y al crecimiento de las iglesias protestantes que habrían pasado en una década de 5 al 8% de la población total (Klaiber, 1993; INE, 1993). El poder de los medios, especialmente el de la TV y el de la radio, fue creciendo a medida que se desgataba el de los partidos (López, 1994). En la década se produjo

un crecimiento explosivo de las ONGS cuyo número asciende a 897. De una muestra de 284 ONGs surgidas entre 1965 y 1983 ó 1993, 198 aparecieron entre 1981 y 1990 (Noriega y Saravia, 1994). Del conjunto de las ONGs, 536 se concentran en Lima; 307 operan a nivel urbano, 212 a nivel rural, y 250 en ambos campos; 312 se dedican a la educación, 194 a salud; 145 a desarrollo rural; 137 a ecología; 107 a autogestión y 105 a documentación (Ibidem).

La fuerza espiritual conservadora de los medios y de la misma Iglesia Católica fue reforzada por la fuerza material creciente de la CONFIEP. La centralización empresarial se fortalecía al mismo ritmo que se debilitaba la centralización sindical y popular. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) fue fundada en setiembre de 1984 por la Cámara Peruana de la Construcción, la Sociedad de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CAMCO), la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SONAMINPET). En 1985 se integraron a la CONFIEP la Asociación de Armadores del Perú, la Asociación de Bancos del Perú, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, la Asociación de Radio y Televisión del Perú, Asociación Peruana de Empresas Aéreas, la Cámara Nacional de Turismo, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Producción del Perú, la Organización Nacional Agraria. En 1987 se incorporaron a la CONFIEP otras 8 organizaciones empresariales, lo que ha permitido articular crecientemente al empresariado del país (CONFIEP, 1987).

El debilitamiento de las organizaciones sindicales y territoriales ha sido parcialmente compensada por la presencia, en el escenario social, de los comedores y comités femeninos del vaso de leche y las rondas campesinas de autodefensa, todas ellas reivindicadoras del derecho a la sobrevivencia en un contexto de aguda crisis económica y política (Blondet, 1994).

El debilitamiento de las instituciones ha sido directamente proporcional al fortalecimiento de las fuerzas subversivas, especialmente de Sendero Luminoso. Hasta antes del ingreso de las FF.AA., Sendero surgió rápidamente como el principal factor de poder en el campo: "Decenas de distritos rurales y cientos de comunidades empezaron a

sentir su poder. Los organismos del Estado en estas zonas se paralizaron, los alcaldes renunciaron, los profesores, médicos y agentes sanitarios se refugiaron en las capitales de provincia, la mayoría de los comerciantes y transportistas 'colaboraba' con los 'compañeros' para evitar problemas y poder continuar con sus actividades y negocios" (Tapia, 1993). En los años 1985-1988, Sendero se irradió a nivel nacional, se articuló con el narcotráfico y salió a la luz pública con su vocero oficioso *El Diario*. Desde 1989 incrementó sus acciones espectaculares en las ciudades. La presencia creciente de Sendero se expresó en el crecimiento de sus cuadros así como en el control del territorio: "Hacia 1989-90,..., el senderismo controlaba del 2 al 3 por ciento del territorio nacional, en donde habitaba el 1 por ciento de la población del país. Además, había logrado crear el vacío del poder en un 8 a 10 por ciento del territorio donde vivía un 5 por ciento de la población del país" (Tapia, 1993).

IV. EL FUJIMORISMO, LOS PODERES FACTICOS Y LA DESINSTITUCIONALIZACION

Fujimori llegó al gobierno gracias al desmoronamiento de las instituciones –sobre todo de los partidos políticos–, se mantuvo en él y se consolidó luego del autgolpe del 5 de abril de 1992, explotando el desprestigio de los partidos y el Parlamento y apoyándose en los poderes fácticos (López, 1993). Fujimori llegó al poder como candidato neopopulista, pero luego de su viaje al exterior, inmediatamente después de la segunda vuelta, se convirtió en un Presidente neoliberal. Al carecer de un programa, asumió el plan de estabilización del FMI y, al poco tiempo, aplicó el ajuste estructural que ha cambiado radicalmente no sólo las formas de modernización y el carácter del Estado sino también el tipo de régimen político. Se produjo entonces un realineamiento de fuerzas: el APRA pasó a la oposición y los partidos y movimientos integrantes del FREDEMO respaldaron a Fujimori quien, sin embargo, buscó un respaldo más seguro en la Iglesia Católica –desprendiéndose de los evangelistas–, en las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia. Se fue organizando desde entonces la nueva coalición dominante del gran capital –integrada por el capital extranjero, el gran empresariado nacional y la tecnocracia primero civil y, luego del autgolpe, también militar– y cuya forma de dominio es "neopatrimonial" (Cotler, 1994). En los dos primeros años de su Gobierno, Fujimori aplicó una política de exclusión en términos económi-

cos, pero de inclusión en términos políticos. Las políticas públicas aplicadas han sido las propaladas por el FMI y la tecnocracia fondomonetarista. Sus metas son una economía eficiente basada en las ventajas comparativas, con un mercado en equilibrio y sin precios artificiales; una sociedad de individuos egoístas sin organizaciones ni instituciones sólidas; y un Estado mínimo que prescindiera de sus funciones económicas y sociales. Los instrumentos para lograrlas han sido la reducción drástica del déficit fiscal, la liberación de precios, salvo el de los salarios, la liberación de los flujos internacionales de capitales y la eliminación de los subsidios, entre otras medidas. Los éxitos parciales en la disminución de la inflación y del déficit fiscal se han logrado a costa de una asfixiante recesión y de excluir a amplios sectores sociales de todos o parte de los servicios básicos. La liberación de los precios ha castigado a los salarios cuyos aumentos a cargo del gobierno siempre están por debajo de la inflación.

Las reformas estructurales han implicado una transformación radical del Estado que ha perdido su lugar hegemónico en la sociedad, ha visto recortadas sus funciones y reducido su tamaño; pero al mismo tiempo se ha vuelto más rígido y excluyente como forma de dominación social. Las clases medias y populares incrementaron su empobrecimiento y la informalización se intensificó. Con la globalización se intensificó también la modernización cultural así como la movilización social.

El programa de estabilización y el ajuste estructural así como la violencia política han minado el proceso de democratización así como la participación política de la ciudadanía, lo que se vio agravado con el autogolpe del 5 de Abril. La aplicación del shock más grande de la historia y la ausencia de algún tipo de protesta, mostró la debilidad de la sociedad civil y la incapacidad de los partidos políticos para canalizar demandas y suscitar propuestas.

La década del '90 ha llevado hasta sus límites los rasgos del mapa institucional del '80 y ha legitimado desde el poder del Estado el proceso de desinstitucionalización del país enmarcándolo en un acelerado proceso de cambios económicos, sociales y políticos que siguen la propuesta neoliberal y la lógica de la globalización.

Los cambios institucionales en el Estado han sido radicales. Con excepción de las FF.AA. y de la Policía Nacional, casi todas las institu-

ciones estatales han colapsado tanto a nivel técnico como administrativo. Sin embargo, la política de cooptación de los altos mandos establecida por Alan García y seguida por Fujimori ha debilitado la institucionalidad de las FF.AA, pero ellas han experimentado al mismo tiempo "un incremento del poder operativo y de la eficiencia de la Fuerza Armada" (Obando, 1993).

Los cambios estatales han sido rápidos. En corto tiempo el Perú ha pasado de un Estado populista sobrecargado a un Estado mínimo que busca eludir sus responsabilidades económicas y sociales. El gasto público en acumulación ha disminuido del 11.4% en 1986-1990 a 6.0% en 1991-1993. Algo parecido ha sucedido con el gasto en legitimación que se ha reducido del 19.6% a 15.7% en los mismos períodos y con los gastos regionales y generales. Los gobiernos regionales y sus asambleas democráticamente elegidas por sus respectivas regiones fueron clausurados por el autogolpe del 5 de Abril de 1992. Desde entonces los presidentes de las regiones son nombrados por el poder Ejecutivo. Con la excepción del de Lima, el gobierno central ha buscado fortalecer los gobiernos locales y establecer con ellos una relación directa. Los gastos públicos generales, sin embargo, crecerán significativamente en 1994, sobre todo los que se refieren al Ministerio de la Presidencia que ha llegado a disponer de alrededor del 15% de los ingresos fiscales. Con ese incremento se elevarán también los gastos de legitimación que son realizados, no por los canales institucionales correspondientes, sino directamente por el Presidente de la República. Los gastos públicos que han crecido significativamente son los que se refieren a seguridad que pasan del 25.65% en 1986-1990 a 30.0% en 1991-1993 y los de la deuda externa que pasan del 31.1% al 42.4% en los mismos períodos (Jurado, 1994). Pese al incremento del gasto público en seguridad, el Estado se ha replegado, no sólo en sus funciones económicas y sociales, sino también en sus funciones tradicionales de garantizar el orden y la seguridad. En respuesta a ese repliegue del Estado, han surgido dos formas de reacción: la de las clases medias y altas que compran en el mercado su seguridad adquiriendo rejas y contratando huachimanes y la de algunos sectores de las clases bajas que se organizan a través de rondas que llenan el vacío del Estado. Independientemente de su origen autónomo o paramilitar, las rondas colaboran con las FF.AA. y la Policía Nacional en la mantención del orden público (Starn, 1993). Se calcula que las rondas campesinas en el norte ascienden a 3,480 y en el centro y en el sur a 1,020 (Ibidem).

La intervención del Estado en la economía ha disminuido en forma drástica. Las funciones e instituciones que tenían que ver con la regulación del mercado de trabajo, de bienes y servicios y de capitales han sido desactivadas. Ya a fines de 1992 se expedieron alrededor de 100 decretos legislativos, como producto de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Parlamento, para desregular los diversos mercados. Se han mantenido y fortalecido, en cambio, aquellas funciones e instituciones que tienen que ver con la política macroeconómica, entre ellas el BCR y la SUNAT (Gonzales de Olarte, 1993).

Los proyectos de inversión en el campo, sobre todo en infraestructura, son canalizados, no por la empresa privada, sino por las FF.AA. que funcionan como contratistas privilegiados del Estado, especialmente en las zonas declaradas en estado de emergencia. El Estado—así como otras instituciones incluídas las ONGs— se ha replegado del resto de proyectos de inversión no sólo debido a la crisis fiscal, sino sobre todo debido a la violencia política. Desde el autogolpe del 5 de Abril de 1992, el rol de las FF.AA. se ha diversificado: Las FF.AA. canalizan parte de las políticas sociales y de las donaciones que realiza el Presidente de la República e incluso, según las denuncias de algunos medios de comunicación y de la oposición, realiza tareas de propaganda en favor de la reelección de Fujimori.

La privatización de las empresas públicas ha sido acelerada en 1993 y busca completarse en 1994 y 1995. Ya han sido vendidas algunas de las más importantes, tanto no financieras como financieras. De las más grandes sólo faltan PetroPerú y Centromin.

Las instituciones representativas tanto las que operan en el Estado—el Parlamento y el poder electoral— como las que actúan en la sociedad civil—los partidos— se desgastaron y colapsaron, acentuando las tendencias preexistentes en la década anterior.

En lo que va de la década del '90, la crisis de los partidos se ha profundizado y los ha convertido en factores secundarios en la lucha por el poder. La centralidad de los "outsiders" se ha consolidado en la misma medida en que los partidos han sido arrinconados en el escenario político. Las elecciones del CCD de noviembre de 1992, en la que los partidos más importantes se abstuvieron de participar, confirmaron su aislamiento. Pese a que la "participación electoral efectiva" fue la más

baja de la historia política de este siglo y el "abstencionismo electoral" fue muy alto (Roncagliolo, 1993), la mayoría de la población fue a votar.

Las expectativas partidarias de recuperación en las elecciones municipales de enero de 1994 no se vieron confirmadas: "Los candidatos no vinculados a los partidos políticos tradicionales se impusieron en todo el país, aunque entre los vencedores sólo figuraran unos pocos de aquellos que patrocinara directamente Alberto Fujimori. En Lima, que representa algo más de un tercio del padrón electoral nacional, tres cuartas partes se inclinaron por candidatos sin vínculos partidarios, pese a que ello supuso reelegir como Alcalde de Lima a Ricardo Belmont, cuya gestión no generó una aprobación mayoritaria durante casi los tres años del período, según indicaron encuestas periódicas. De los cuarenta distritos limeños, los candidatos de los partidos tradicionales ganaron sólo 10, en tanto los "independientes" se hicieron de la mayoría" (Pásara, 1993). Los alcaldes independientes pasaron de 2 a 14 en las 24 capitales departamentales del país (Torres, 1993). El referéndum de mayo de 1994, que resultó prácticamente un empate entre el SI y el NO, levantó el ánimo de los partidos, especialmente de los que se abstuvieron en las elecciones del CCD, que se atribuyeron el alto porcentaje de rechazo a la Constitución de 1993. Todo parece indicar, sin embargo, que esa apreciación es un espejismo y que la disputa electoral de fondo de abril de 1995 se realizará entre dos "outsiders" de la política: Alberto Fujimori y Javier Pérez de Cuéllar (López, 1994).

En la década del '90, la sociedad civil ha contribuido con proporcionar dos de los tres poderes fácticos que han terminado desplazando a los partidos y que constituyen la actual coalición dominante en el poder: los expertos o tecnócratas fondomonetaristas y los empresarios. Los expertos, que ven en la política y en los políticos un obstáculo para el desarrollo de la racionalidad y que tienen por función escoger los medios adecuados para conseguir los fines propuestos, han desplazado a los intelectuales que tenían que ver con los valores. Carlos Franco y Hernando de Soto encarnaron quizá, cada uno en su momento, el rol del intelectual y del experto y sus diferentes destinos en estas dos últimas décadas (Sánchez León, 1993). Los expertos no constituyen "una corporación muy poderosa", pero comparten una cierta experiencia en el manejo especializado de los asuntos públicos que les han permitido desarrollar un conjunto de características que los hace estar

disponibles para ponerse al servicio de cualquier gobierno, independiente de su origen y de su signo ideológico (Lauer, 1993).

La Iglesia Católica se mantiene como la institución más prestigiada de la sociedad civil y del país, pese a su estancamiento y a las tensiones larvadas entre las diversas corrientes que existen en su seno y pese a que la jerarquía eclesiástica ha sido copada por los conservadores que, con excepción de los seis obispos del Opus Dei, no constituyen, sin embargo un grupo homogéneo. Los sectores progresistas han sido marginados de puestos importantes de autoridad, pero siguen manteniendo vigencia, especialmente en el Sur Andino (Klaiber, 1993). Los medios de comunicación de masas, especialmente la TV y la radio, mantienen una gran influencia en el país. La prensa escrita, en cambio, ha perdido la influencia que antes tenía: la masa actual de lectores es menor que la existente en la década del '60 (Thorndike, 1994). El país, como el mundo, ha pasado en el campo de las comunicaciones de la galaxia Gutenberg a la galaxia Marconi y pronto llegará a la galaxia Bit (Roncagliolo, 1994). Estas revoluciones tecnológicas tornarán obsoletas las relaciones políticas cara a cara, volverán caducos el mitin, el local partidario, las ideologías, la militancia, el voto denso y darán a luz cada vez con más fuerza a la política *light*.

La fuerza de las organizaciones empresariales ha crecido con la presencia de empresarios importantes en las esferas del gobierno. En cambio, las organizaciones populares, con excepción de las de sobrevivencia y de las rondas campesinas, han sufrido una erosión progresiva. Es sobre todo el sindicalismo el que ha dejado de ser una fuerza social significativa en el país tanto en volumen como en organización: actualmente es incapaz de poner en jaque al Gobierno y de paralizar el país como en la década del '70 (Balbi, 1993).

VI. LA CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD POLITICA

El orden oligárquico se mostró hostil al desarrollo de las instituciones modernas tanto del Estado como de la sociedad civil y los partidos. El orden populista creó un conjunto de instituciones que han evidenciado su fragilidad, y el orden neoliberal, combinado con el autoritarismo, es incapaz de crear instituciones modernas que contribuyan a la construcción de una comunidad política.

La conversión de una sociedad compleja, socialmente polarizada y culturalmente heterogénea como la peruana, en una comunidad política requiere un alto nivel de institucionalidad. Esta consiste en el establecimiento de "pautas de conducta reiteradas, estables y apreciadas" (Huntington, 1972) y depende de la fuerza y amplitud de sus organizaciones y procedimientos. La diversidad de las organizaciones depende, a su vez, del grado de modernización del país. Mientras más moderna es una sociedad mayor es la diversidad de sus organizaciones y más alto es su nivel de institucionalidad.

La modernidad supone universalidad pero no necesariamente homogeneidad cultural. Eso implica el reconocimiento del Perú como una comunidad nacional plural en la que todos los peruanos, procedentes de diversas razas, etnias, géneros, culturas, religiones, regiones y clases sociales, se sientan iguales y se piensen como sujetos con los mismos derechos y deberes. La universalidad de los peruanos —su ciudadanía— tiene que construirse, no sobre una necesaria homogeneidad de la población, sino sobre la base del reconocimiento de sus diferencias.

Otro elemento clave para el desarrollo de las instituciones y de la comunidad política es el impulso de la democratización y de la movilización política. El reconocimiento de la ciudadanía plena es el mejor impulso democratizador de una sociedad. Si el Perú quiere ser una comunidad política es necesario que los peruanos y las peruanas no sólo se sientan votantes sino también electores y personas con derecho al trabajo, a la cultura, al progreso y a una vida digna.

Es un hecho conocido que cuando la modernización cultural y la movilización social son más veloces que la modernización económica se genera una tensión entre las expectativas y las capacidades y, como consecuencia, se produce inestabilidad e ingobernabilidad. La situación se agrava hasta llegar a consolidar un sistema político pretoriano cuando la democratización y la modernización política rebasan las instituciones existentes que se muestran incapaces de absorberlas y canalizarlas (Tocqueville, 1957; Huntington, 1972). Ello obliga a reforzar las organizaciones y los procedimientos.

La forma de Estado es, sin duda, otro elemento básico en la construcción de una comunidad política. Hasta ahora las diversas formas de Estado que ha tenido el Perú —el Estado oligárquico, el Estado

populista y el Estado del gran capital— han sido incapaces de crear una comunidad política. La forma de Estado conocida que puede lograr ese objetivo es el Estado liberal-democrático, esto es, un Estado que, al mismo tiempo que limita su poder y sus funciones, permite la participación política de todos (Bobbio, 1989). Sin embargo, por más liberal y democrático que sea un Estado siempre expresará una forma de dominación social que se procesará a través de una coalición dominante y de un conjunto de instituciones, pero lo que sí puede evitar es la existencia de las discriminaciones y la aplicación de las políticas públicas de exclusión.

Finalmente, un componente central de la institucionalización y de la construcción de una comunidad política es el tipo de régimen político. Los regímenes autoritarios —cualquiera sea la forma que asuman— bloquean siempre la forja de una comunidad política democrática. Los que la favorecen son los regímenes democráticos. Pero como existen diversos “modelos de democracia” (Held, 1992), es necesario preguntarse cuál de ellos contribuye mejor al desarrollo de una comunidad política. Recogiendo la más ilustre tradición del pensamiento político de Aristóteles en adelante sobre las bondades de los regímenes mixtos, parece que el régimen democrático que mejor puede contribuir a forjar una comunidad política es aquel que combina la democracia representativa con la democracia participativa (Pateman, 1970; Macpherson, 1981).

Una reflexión final sobre la democracia y la eficacia. Como la democracia se legitima por el origen y los procedimientos, ella ha descuidado el campo de la eficacia que ha sido asumido como objetivo y forma de legitimación por los gobiernos autoritarios. Si quieren cerrar el paso al autoritarismo, las democracias, además del origen y los procedimientos, tienen que legitimarse también por sus resultados.

BIBLIOGRAFIA

- ABUGATTAS, Juan y otros
1992 Desde el límite. Perú, reflexiones en el umbral de una nueva época. IDS. Lima.
- ADRIANZEN, Alberto y otros
1993 Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos. IFEA, IEP. Lima.
- ADRIANZEN, Alberto
1993 Partidos políticos y orden social en el Perú. En: Adrianzén y otros. Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos. Lima.
- ALVAREZ Rodrich,
1991 Empresas estatales y privatización. Cómo reformar la actividad empresarial del Estado en el Perú. Editorial Apoyo. Lima.
- 1993 El poder en el Perú. Editorial Apoyo. Lima.
- BALBI, Carmen Rosa
1989 Identidad clasista en el sindicalismo. Su impacto en las fábricas. DESCO. Lima.
- 1993 El desaparecido poder del sindicalismo. En: Alvarez R. El poder en el Perú. Lima.
- BEJAR, Héctor y Carlos, FRANCO
1985 Organización campesina y reestructuración del Estado. CEDEP. Lima.
- BLONDET, Cecilia
1993 Poder y organizaciones populares: estrategias de integración social. En: Alvarez R. El poder en el Perú. Lima.
- BOURRICAUD, François
1967 Poder y Sociedad en el Perú contemporáneo. Sur. Buenos Aires.

- CARDOSO, Fernando Henrique y Enzo, FALETTO
1971a. Dependencia y Desarrollo en América Latina. Siglo XXI. México.
- CARDOSO, Fernando Henrique
1971b. Ideologías de la burguesía industrial en sociedades dependientes (Argentina y Brasil). Siglo XXI editores. México.
1985. Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en América Latina. En: Collier, David. El nuevo autoritarismo en América Latina.
- CEPAL
1973. Evaluación regional de la estrategia internacional de desarrollo. CEPAL. Santiago de Chile.
- CIUP
1992. Evolución de la economía peruana. Primer semestre de 1992. UP. Lima.
- COLLIN-DELAUVAUD, Claude
1976. Consecuencia de la modernización de la agricultura en las haciendas de la costa norte del Perú. En: Matos, José (comp). Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú.
- COLLIER, David
1978. Barriadas y élites: De Odría a Velasco. IEP. Lima
1985. El nuevo autoritarismo en América Latina. FCE. México.
1985. Visión general del modelo burocrático autoritario. En: Collier, David. El Nuevo Autoritarismo en América Latina.
- CONFIEP
1987. Memoria 1987. CONFIEP. Lima.
- COTLER, Julio
1968. La mecánica de la dominación interna y del cambio social en el Perú. En: Perú Problema 1. IEP. Lima.

- 1976 Haciendas y comunidades tradicionales en un contexto de movilización política. En: Matos, José (comp). Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú.
- 1978 Clases, Estado y Nación en el Perú. Perú Problema N° 17. IEP. Lima
- 1985 Democracia e integración nacional en el Perú. En: Lowenthal, A. El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980.
- 1988 Los partidos políticos en la democracia peruana. En: Pásara, Luis y Parodi, Jorge. Democracia, sociedad y gobierno en el Perú.
- 1994 Crisis política, "outsiders" y democraduras: El fujimorismo. IEP. mimeo. Lima.
- DANCOURT, Oscar
- 1980 Aspectos económicos de la lucha campesina en el Perú 1957-1964. PUC. mimeo. Lima
- DE BELAUNDE, Javier
- 1991 Aproximación a la realidad de la administración de justicia en el Perú. En García Sayán. Poder Judicial y democracia.
- DEGREGORI, Carlos Iván y GROMPONE, Romeo
- 1991 Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas. IEP. Lima.
- DURAND, Francisco
- 1982 La década frustrada. Los industriales y el poder 1970-1980. DESCO. Lima.
- EGUREN, Fernando
- 1988 Democracia y sociedad rural. En Pásara y Parodi. Democracia, sociedad y gobierno en el Perú.

- FAVRE, Henri
1976 Evolución y situación de la hacienda tradicional de la región de Huancavelica. En: Matos, José (Comp.). Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú.
- FIORAVANTI, Eduardo
1974 Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú. IEP. Lima.
- FITZGERALD, E.V.K.
1981 La economía política del Perú, 1956-1978. Desarrollo Económico y reestructuración del capital. IEP. Lima.
- FRANCO, Carlos (coordinador)
1983 El Perú de Velasco. CEDEP. Lima.
- 1983 El significado de la experiencia velasquista: forma política y contenido social. En: Franco, Carlos (coordinador). El Perú de Velasco.
- FUENZALIDA, Fernando
1971 Poder, raza y etnia en el Perú contemporáneo. En: Perú: hoy. 1971. Siglo XXI editores. México.
- 1976 Estructura de la comunidad de indígenas tradicional. Una hipótesis de trabajo. En: Matos, José (comp). Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú.
- GARCIA-SAYAN, Diego
1991 Poder Judicial y Democracia. Comisión Andina de Juristas y Centro para la independencia de jueces y abogados. Lima.
- GARGUREVICH, Juan
1977 Introducción a la historia de los medios de comunicación en el Perú. Editorial Horizonte. Lima.
- 1987 Prensa, Radio y TV. Historia crítica. Editorial Horizonte. Lima.

GERMANI, Gino

1966 Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas. *Paidós*. Buenos Aires.

GIESECKE, Alberto (editor)

1989 Burocracia, democratización y sociedad. *Fomciencias, Centro y Concytec*. Lima.

GONZALES DE OLARTE, Efraín y Lilian, SAMAME

1991 El péndulo peruano. Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990. IEP-Consortio de investigación económica. Lima.

GONZALES DE OLARTE, Efraín

1993 Restricciones institucionales a las políticas económicas en el Perú. IEP. Lima.

GROMPONE, Romeo

1993 El velero en el viento. IEP. Lima.

1994

Estado, Sociedad y Política en el nuevo tiempo. IEP. mimeo. Lima.

GUERRA, Francisco

1983 Proceso de cambio y régimen militar. En: Franco, Carlos (coordin). El Perú de Velasco.

HABERMAS, Jürgen

1989 El discurso filosófico de la modernidad. Taurus. Madrid.

HANDELMAN, Howard

1975 Struggle in the Andes. University of Texas. Austin.

HINZE, Otto

1968 Historia de las formas políticas. Revista de Occidente. Madrid.

HELD

1992 Modelos de democracia. Alianza Editorial. Madrid.

1993

Prospects for Democracy. Polity Press. Cambridge.

- HUNTINGTON, Samuel P.
1972 El orden político en las sociedades en cambio. *Paidós*. Buenos Aires.
- INEI
1993 Censo Nacional de Población 1993. INEI. Lima.
- JURADO, Joel
1994 Cambios en el bloque en el poder y finanzas del Estado. Documento de trabajo. IDS. Lima.
- KAPSOLI, Wilfredo
1977 Los movimientos campesinos en el Perú 1879-1965. Delva editores. Lima.
- KLAIBER, Jeffrey
1987 La Iglesia en el Perú. PUC. Fondo Editorial. 1987.
1988 Religión y Revolución en el Perú 1824-1988. CIUP. Universidad del Pacífico. Lima.
1993 El poder religioso. En: Alvarez R. El poder en el Perú.
- KLAREN, Peter
1970 Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA. IEP. Lima.
- KRUIJT, Dirk
1991 Entre Sendero y los militares. Seguridad y relaciones cívico-militares 1950-1990. Editorial Robles. Barcelona.
- LAUER, Mirko
1993 Poder, continuidad y cambio en la tecnocracia peruana. En: Alvarez R. El poder en el Perú.
- LETTS, Ricardo
1981 La izquierda peruana. Organizaciones y tendencias. Mosca Azul. Lima.
- LOPEZ, Sinesio
1991 El Dios Mortal. Estado, Sociedad y Política en el Perú del siglo XX. IDS. Lima.

- 1992 Perú: Una modernización frustrada (1930-1991). En: Abugattás, Juan y otros. Desde el límite. Perú, reflexiones en el umbral de una nueva época.
- 1993 Perú: golpe, democradura y democracia. En: Cuestión de Estado 4-5. Set-Oct. 1993. IDS. Lima.
- 1994 Perú: Una pista de doble vía. La transición entre el autoritarismo y la democratización (1992-1995). Documento IDS. En: Cuestión de Estado N° 8-9. IDS. Lima.
- 1994 Los partidos políticos: crisis, renovación y refundación. En: Cuestión de Estado N° 7. IDS. Lima.
- LOWENTHAL, Abraham F.
- 1985 El experimento peruano reconsiderado. En: McClintock, Cynthia y Lowenthal, Abraham F. El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980.
- LYNCH, Nicolás
- 1992 La transición conservadora. Movimiento Social y Democracia en el Perú, 1975-1978. El Zorro de Abajo ediciones. Lima.
- McCLINTOCK, Cynthia y LOWENTHAL, Abraham
- 1985 El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980. IEP. Lima.
- MACPHERSON, C.B.
- 1981 La democracia liberal y su época. Alianza editorial. Madrid.
- MATOS, José (comp.)
- 1976 Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú. Perú Problema 3. IEP. Lima.
- 1976 Proceso de la sociedad rural. En: Matos, José. Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú.
- MAUCERI, Philip
- 1989 Militares: Insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988. IEP. Lima.

- MERCADO JARRIN, Edgardo
1964 El Ejército de hoy y su proyección en nuestra sociedad en período de transición (1940-1965). En: *Revista Militar del Perú*, N° 685. Lima.
- NEIRA, Hugo
1968 Los Andes, tierra o muerte. Editorial XYZ, Madrid.
- NORIEGA, Jorge y SARAIVIA, Miguel
1994 Perú: Las organizaciones no gubernamentales (ONG). DESCO. Lima.
- NUGENT, José Guillermo
1992 El laberinto de la choledad. Fundación Friedrich Ebert. Lima.
- O'DONNELL, Guillermo
1972 Modernización y autoritarismo. Paidós. Buenos Aires.
- 1985 Las tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia. En: Collier, David. *El nuevo autoritarismo en América Latina*.
- 1994 Delegative Democracy. En: *Journal of Democracy*. January 1994. Volume 5, Number 1, pp. 55-69.
- OBANDO, Enrique
1993 El poder de los militares. En: Alvarez, R. *El poder en el Perú*.
- PAREJA, Piedad y GATTI, Aldo
1993 Elecciones municipales en las provincias de Lima y Callao. F.F. Ebert. Lima.
- PATEMAN, Carole
1970 *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press. Cambridge.
- PEASE, Henry
1977 El ocaso del poder oligárquico: Lucha política en la escena oficial, 1968-1975. DESCO. Lima.

- PASARA, Luis y Parodi Jorge
1988 Democracia, sociedad y gobierno en el Perú. CEDYS. Lima.
- PASARA, Luis
1986 Radicalización y conflicto en la Iglesia Peruana. El Virrey. Lima.
- 1993 El ocaso de los partidos. En: Alvarez R. El poder en el Perú.
- PARODI, Jorge
1988 Los sindicatos en la democracia vacía. En: Pásara y Parodi. Democracia, sociedad y gobierno en el Perú.
- PORTOCARRERO, Gonzalo y Patricia, OLIART
1989 El Perú desde la escuela. IIA. Lima.
- QUIJANO, Aníbal
1967 Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina. En: Visión del Perú. N° 2. Lima.
- 1977 Dependencia, urbanización y cambio social en Latinoamérica. Mosca Azul. Lima.
- RODRIGUEZ, José
1992 Gasto público en Educación y distribución del ingreso en el Perú. GRADE. Lima.
- RODRIGUEZ Beruff, Jorge
1983 Los militares y el poder. Un ensayo sobre las doctrinas militares en el Perú, 1948-1968. Mosca Azul. Lima.
- RONCAGLIOLO, Rafael
1980 ¿Quién ganó?. Elecciones 1931-1980. DESCO. Lima.
- 1993 Crisis de participación y sociedad televiciada. En: Cuestión de Estado N° 4-5. IDS. Setiembre-October 1993. Lima.
- 1994 La política en la Galaxia Bit. En: Cuestión de Estado. N° 10. IDS. Lima.

- SARTORI, Giovanni
1988 Teoría de la democracia. Alianza editorial. Madrid.
- STARN, Orin
1993 Hablan los ronderos. La búsqueda por la paz en los Andes. IEP. Lima.
- SULMONT, Denis
1977 Historia del Movimiento Obrero Peruano (1890-1977). Tarea. Lima
- TAPIA, Carlos
1993 El poder y la subversión. En: Alvarez R. El poder en el Perú.
- THE PERU REPORT
1988 PERU: The top 1,500. Peru Reporting. Lima.
- THE WORLD BANK
1988 Perú: Políticas to stop Hiperinflation and initiate economic recovery. Washington.
- THORNDIKE, Guillermo
1994 Falta interés y dinero. En: Debate N° 78. Julio-Agosto 1994. Lima.
- THORP, Rosemary y Geoffrey, BERTRAM
1985 Perú: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta. Mosca Azul-F. F. Ebert-Universidad del Pacífico. Lima
- TOCQUEVILLE, Alexis
1957 La democracia en América. FCE. México.
- TORRES, Alfredo
1993 Los cambios en la opinión pública. En: Alvarez R. El poder en el Perú.
- TRAZEGNIES, Fernando de
1992 La idea de derecho en el Perú Republicano del siglo XIX. PUC. Fondo Editorial. Lima.

TUESTA, Fernando

1987 Perú político en cifras. Fundación Friedrich Ebert. Lima.

VEGAS, José Martín

1990 Fuerzas Policiales, Sociedad y Constitución. IDL. Lima.

VILLANUEVA, Víctor

1972 El CAEM y la revolución de la Fuerza Armada. IEP-Campodónico Ed. Lima.

1973

El ejército peruano, del caudillaje anárquico al militarismo reformista. Mejía Baca. Lima.

WEBER, Max

1964 Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. FCE. México. Tomo 1.